

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES

Manizales, veintiséis (26) de abril de dos mil veintiuno (2021).

RADICADO	2019-00564-00
PROCESO:	EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE:	ARGEMIRO AGUIRRE RAMIREZ
DEMANDADOS:	RODRIGO PINEDA MURILLO
	LINA ESPERANZA CORTES RUIZ

SENTENCIA No.63

Procede el Despacho a proferir sentencia anticipada de conformidad con lo establecido en el numeral segundo del inciso segundo del artículo 278 del Código General del Proceso, dentro del presente proceso.

ANTECEDENTES

La parte ejecutante, actuando a través de apoderada presentó demanda ejecutiva para ordenar el pago de la suma de \$2.000.000 más sus intereses moratorios causados desde el 11 de febrero de 2017 hasta que se produzca el pago total de la obligación, la cual correspondió por reparto a este Juzgado.

Aduce la profesional del derecho que la parte demandada realizó contrato de mutuo con el señor Argemiro Aguirre Ramírez, mediante la suscripción de una letra de cambio por valor de \$2.000.000 con fecha de creación 10 de noviembre de 2016 y vencimiento el 10 de noviembre del mismo año. Sostiene igualmente que la ejecutada se encuentra en mora de cancelar el capital y los intereses desde el 17 de febrero de 2017, por lo cual ejerce acción ejecutiva en su contra.

La demanda fue presentada el 05 de septiembre de 2019 y luego de su reparto este juzgado libró mandamiento de pago mediante auto del 10 de septiembre del mismo año, por las sumas reclamadas, cuyo proveído fue notificado por estado al demandante al día siguiente.

Ante la imposibilidad de notificar personalmente a la parte ejecutada, fue necesario emplazarlos y tras cumplir las exigencias legales se le designó curador ad-lítem. Dentro de su traslado contestó la demanda y propuso como excepción de fondo la que denominó Prescripción, solicitando se decretara la prescripción de cualquier obligación o derecho que por el paso del tiempo deba ser reconocida a favor de sus representados.

Luego del trámite correspondiente se corrió traslado de la contestación a la parte actora y dentro del término concedido no contestó.

Así las cosas, entra el juzgado a resolver el asunto, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

En el presente asunto están reunidos a cabalidad los presupuestos procesales de capacidad para ser parte, demanda en forma, competencia y capacidad procesal.

El proceso se ha tramitado regularmente, lo que permite decidir de fondo o mérito la cuestión debatida, puesto que el líbello introductor reúne los requisitos legales del ordenamiento procesal civil y, no comporta una indebida acumulación de pretensiones.

Este Despacho es competente para conocer de la acción planteada por el lugar de cumplimiento de la obligación y por la cuantía de las pretensiones; las partes que intervienen en este asunto son personas naturales con capacidad para ser parte.

Se presentó como base para el recaudo ejecutivo, el título que se describe a continuación: Letra de cambio SC-1110135823 suscrita por los demandados a favor del demandante por un valor de \$2.000.000 pagaderos el 10 de noviembre de 2016.

Los ejecutados a través de curador ad-litem, propusieron las excepciones de mérito que denominó “prescripción” y descenderá entonces, esta funcionaria al estudio de estas. Veamos:

No hay duda frente a los requisitos del título valor ni nada se precisa con el fin de horadar el mismo, por lo tanto, se parte de la base que la letra de cambio proviene del deudor y constituye plena prueba contra él, tratándose entonces de un título que presta suficiente mérito ejecutivo por contener una obligación dineraria a favor de la parte ejecutante y en contra del demandado, según la preceptiva contenida en el artículo 422 del Código General del Proceso.

Para el caso que se examina y específicamente la excepción que se estudia, establece el artículo 2513 del Código Civil que *“el que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio.”* Lo anterior implica, que uno de los elementos que conforman la prescripción sólo se da en el proceso y pertenece a éste exclusivamente, por lo tanto, no invade el derecho procesal una esfera ajena, cuando reglamenta asuntos atinentes a la prescripción, que ocurren dentro del proceso. Pues como se ve, la prescripción es una institución que no puede encuadrarse exclusivamente en uno de estos dos campos: el que corresponde al derecho sustancial y el del derecho procesal.

Siguiendo la línea antes descrita, el artículo 94 del C.G.P establece: *“La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado...”*

Si fueren varios los demandados y existiere entre ellos litisconsorcio facultativo, los efectos de la notificación a los que se refiere este artículo se surtirán para cada uno separadamente, salvo norma sustancial o procesal en contrario. Si el litisconsorcio fuere necesario será indispensable la notificación a todos ellos para que se surtan dichos efectos...”

Como es sabido, la prescripción en su modalidad extintiva, es un modo de extinguir acciones por no haberse ejercido el correspondiente derecho durante cierto lapso, contando ese tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible (art.2535 del C.C.), pues las relaciones jurídicas que rigen determinada figura tienen como nota común su carácter eminentemente temporal, lo que implica que el tiempo dentro del Derecho es de vital importancia y es presupuesto básico para las relaciones que regula.

Para el caso que nos ocupa, el tiempo para ejercer la acción cambiaria es de tres años a partir del día del vencimiento, según lo establece el artículo 789 del C.Co, lo que significa, en el de marras,

que el tiempo con el que contaba el acreedor para interponer la demanda corría hasta el 10 de noviembre de 2019 y con ello interrumpir el término de la prescripción extintiva, lo que en efecto ocurrió. No obstante, para que la presentación de la demanda interrumpa el término para la prescripción o impida que se produzca la caducidad, se precisan dos requisitos: a) Presentación de la demanda antes de que se haya consumado la prescripción o producido la caducidad. b) Que la notificación al demandado del auto admisorio de la demanda, o del mandamiento ejecutivo en su caso, ocurra “dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la demandante de tales providencias, personalmente”. Estos son los requisitos para que la presentación de la demanda se constituya en el hito determinante de la interrupción del término de prescripción o de impedimento para que se produzca la caducidad, desde la misma fecha de su presentación. De no darse la segunda condición, como apenas resulta lógico, la norma prevé que los señalados “efectos sólo se producirán con la notificación al demandado”, siendo ésta la fecha significativa. Adviértase cómo la norma estructura los efectos de la interrupción del término de prescripción o de inoperancia de la caducidad desde la fecha de presentación de la demanda, a partir de dos conductas de la parte demandante: presentación oportuna de la demanda y notificación oportuna al demandado.

Analizando el caso concreto, específicamente la notificación de los demandados Rodrigo Pineda Murillo y Lina Esperanza Cortes Ruiz como segundo acto de parte para el beneficio de la interrupción de la prescripción, este Despacho extrae del proceso lo que a continuación se describe:

Las diligencias de notificación fueron iniciadas el 18 de octubre de 2019, a través el Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Civiles y de Familia; el 30 de octubre de 2019 dicha oficina realiza la devolución de la diligencia de notificación de los dos demandados, por cuanto la empresa de envíos “Envía” hizo devolución de la guía número 076000091217 correspondiente al señor Rodrigo Pineda, donde manifiestan que no se conoce el número de apartamento, y respecto de la demandada Lina Esperanza Cortes Ruiz, realiza la devolución de la guía 076000091216 con la anotación de “no marca dirección”; una vez conocido ello por la parte actora, en memorial del 05 de noviembre de 2019 solicita el emplazamiento de la demandada Cortes Ruiz, lo que mediante auto del 06 de noviembre de 2019, se aceptó el emplazamiento y requirió a la apoderada para que manifestara cual era el número de apartamento del demandado Rodrigo Pineda a efectos de su notificación.

Así, en cumplimiento de la providencia, la ejecutante solicita al despacho en fecha del 03 de diciembre de 2019; memorial que no resolvió el despacho, el emplazamiento del demandado Pineda y aportó el edicto emplazatorio de fecha 01 de diciembre de 2019 en el Diario la Patria sobre el emplazamiento de la demandada Cortes Ruiz; luego el 16 de octubre de 2020, la apoderada solicita el emplazamiento del demandado, en tanto desconoce el número de apartamento y solicita su emplazamiento por segunda vez; sobre este se resolvió en fecha del 21 de octubre de 2020, donde se ordenó el mismo.

Así las cosas, en fecha del 20 de agosto y 28 de octubre de 2020 se procedió por parte del despacho a realizar el correspondiente registro en el Tyba de los emplazamientos de los demandados, para lo cual por economía procesal y estando ambos términos finalizados, se procedió a nombrar curador Ad-litem para ambas partes, en fecha del 23 de noviembre de 2020; quien se notificó el 14 de enero de 2021 manifestando su aceptación y el cual fue posesionado el 19 de enero de 2021.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Juez considera que la parte demandante actuó diligentemente en procura de lograr la notificación de los demandados y cumplir con todos los requerimiento que hizo el Despacho y en vista que no fue posible la notificación personal de los mismos, pues solicitó a tiempo su emplazamiento a través de memoriales presentados el 05 de noviembre de 2019, para la señora Cortes Ruiz; 03 de diciembre de 2019 y 16 de octubre de 2020 para el señor Pineda, lo que, para esta Agencia Judicial, la carga de actuar en procura de la notificación de la parte ejecutada se cumplió antes de vencerse el término de un año siguiente a la notificación al demandante del mandamiento de pago, según lo previsto en artículo 94 del C.G.P y antes de la fecha de prescripción establecida en el Código de Comercio.

Siendo necesario reconocer: (i) la actitud diligente del demandante en el proceso, (ii) la oportunidad con que se presentó la demandada, (iii) se solicitó oportunamente la notificación personal y ante la imposibilidad de contactar al demandado en su sitio de residencia, (iv) el emplazamiento también oportuno, pues es claro, que todos estos hechos ocurrieron antes de que operara la prescripción de la acción cambiaria, pues se encontraron dentro del año siguiente a la admisión de la demanda que en principio interrumpió los términos extintivos.

No tener en cuenta dichos actos de parte, resultaría contrario a derecho, mucho más someter al actor que acude al Estado para la realización coactiva del derecho de crédito, a soportar las consecuencias jurídicas desfavorables y de las que no es responsable, pues no se le puede imputar falta de diligencia como ya se demostró, ni debe ser víctima de la incuria judicial presentada cuando pese a solicitar en tiempo el emplazamiento del demandado Rodrigo Pineda, esta no fue resuelta sino hasta que la apoderada lo volvió a solicitar, al igual que la inclusión de los mismos en el Tyba, que soportó por parte de la demandada Cortes Ruiz, más de 4 meses desde presentado el edicto emplazatorio, por lo que sería desmedido desconocer su diligencia endilgándole una responsabilidad que no es suya, pues se itera, la ejecutante cumplió con cada una de las cargas que se le impusieron.

Como bien lo ha expresado la Corte Constitucional *“el juez, al momento de decidir sobre la prescripción de la acción cambiaria en el proceso ejecutivo, sólo puede atender a circunstancias objetivas que le permitan concluir que la falta de notificación al demandado del auto admisorio de la demanda, o del mandamiento de pago, dentro de los 120 días como se contemplaba en el anterior artículo 90 del C.P.C no obedece a la negligencia o desidia del demandante, quien ha realizado una normal actividad para que la notificación se lleve a cabo en su oportunidad, mucho menos puede favorecer la conducta de quien siendo demandado dentro del proceso pretende eludir su responsabilidad impidiendo la notificación.”*

En el sub judice, las circunstancias objetivas permiten dilucidar que la notificación “tardía” del demandado, no obedece a la negligencia o desidia del demandante, por el contrario, fue tan cumplida con su actuar y las cargas impuestas por el Juzgado que presentó las solicitudes de emplazamiento a tiempo al igual que el edicto emplazatorio de una de las demandadas. Por consiguiente, la decisión del juez que considere simple y llanamente que opera la interrupción de la prescripción, por no notificarse al demandado dentro del lapso contenido en el artículo 94 del C.G.P, sin consideración a las diversas actuaciones del demandante, vulnera uno de los elementos que integran no sólo el núcleo esencial del derecho al debido proceso (artículo 29) sino del derecho mismo de acceso a la administración de justicia (artículo 229).

Al respecto en sentencia de septiembre 20 de 2000, expediente 5422, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. M.P. José Fernando Ramírez Gómez señaló:

“El punto que ofrecería duda estaría en la notificación extemporánea, a pesar de la normal diligencia del demandante, por ocultación, escollos u obstáculos de los demandados, o negligencia de los funcionarios judiciales. Pues bien, este aspecto quedó elucidado en las sentencias de 19 de noviembre de 1976. En ellas expuso la Corte:

“Partiendo de que nadie está obligado a lo imposible (ad impossibilia nemo tenetur), la Corte, meditando nuevamente sobre la inteligencia que debe darse al precepto comentado, llega a la conclusión de que, si ejercitado oportunamente el derecho de acción con la presentación de la demanda, la notificación del auto admisorio de ésta, sin culpa posterior del demandante, se hace vencido el bienio a que la ley se refiere en la norma mencionada, entonces la sola presentación del libelo en tiempo tendría el efecto de impedir la caducidad de los efectos patrimoniales de la declaración de paternidad. Proceder de otro modo sería cohonestar el fraude premiando al demandado que se oculta o que intencionalmente estorba que se le notifique en tiempo el auto admisorio, posturas estas que atentan contra la lealtad procesal, o sería hacer responsable de la negligencia de los funcionarios judiciales al mismo demandante que ha realizado una normal actividad para que la notificación se lleve a cabo en oportunidad.

“La inteligencia, pues, que debe darse al texto legal citado es la de que él se refiere al caso preciso en que los funcionarios respectivos o los demandados de ninguna manera han impedido o dificultado la normal notificación del auto admisorio de la demanda. Pero cuando es palmario que no obstante la diligencia del demandante, y a pesar de haberse presentado en tiempo la demanda, la notificación no pudo realizarse, ya sea porque los demandados se ocultan, se ausenten del lugar donde se adelanta el proceso o porque la eluden o dificultan de alguna manera, entonces la notificación por fuera de tiempo no alcanza a generar la caducidad de los efectos patrimoniales, desde luego que esa tardanza tiene su génesis en actos u omisiones de los demandados o en desidia o morosidad culpable de los funcionarios que deben realizar la notificación”.

Esta interpretación no solamente aboga por la protección de los derechos de quien quiso amparar la ley 75 de 1968 (el hijo extramatrimonial), sino por la tutela de principios tan caros al proceso, como lo son la lealtad y la buena fe procesal de las partes, hoy enaltecidos al rango de constitucionales.

Es claro, entonces, que en este caso no puede decirse que la prescripción se da por no notificarse al demandado dentro del lapso de tiempo señalado en el artículo 94 del C.G.P, sin considerar que el término para hacer exigible el título valor suscrito (letra de cambio) es de tres años y que la demanda se presentó antes de que concluyera dicho término, aunado a que, el actuar de la parte demandante para notificar al demandado fue diligente y no puede aplicársele una sanción legal por causas no imputables a su responsabilidad. Corolario de lo anterior, la excepción propuesta no prosperará. De otro lado, se precisa que si bien se propusieron medios exceptivos, teniendo en cuenta que las partes no deprecaron medios probatorios que debieran ser practicados, procede este Despacho a dictar sentencia al tenor de lo rituado en el numeral dos del inciso segundo del artículo 278 del Código General del proceso, que al respecto dice:

“Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias.

Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, y las que resuelven los recursos de casación y revisión. Son autos todas las demás providencias.

En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos:

1. Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. 2. Cuando no hubiere pruebas por practicar. 3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa.”.

Ahora, el fracaso de las excepciones propuestas, obliga a esta funcionaria dictar sentencia favorable a la demandante en la forma dispuesta en la providencia que libró mandamiento de pago.

Igualmente se condenará en costas a la parte demandada en favor del demandante, las que se liquidaran por secretaria, previa la fijación de agencias en derecho, las cuales se establecen en la suma de CIENTO CUARENTA MIL PESOS (\$140.000) y se harán los demás ordenamientos a que hubiere lugar.

En razón y mérito de lo expuesto, el Juzgado Sexto Civil Municipal de Manizales, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR NO PROSPERA LA EXCEPCIÓN denominada **PRESCRIPCIÓN** dentro del proceso adelantado por **ARGEMIRO AGUIRRE RAMÍREZ** en contra de **RODRIGO PINEDA MURILLO y LINA ESPERANZA CORTES RUIZ**.

SEGUNDO: ORDENAR dentro del proceso identificado ut supra, seguir adelante con la ejecución por el capital ordenado en el mandamiento de pago proferido el 10 de septiembre de 2019.

TERCERO: CONDENAR EN COSTAS a la parte demandante en favor de la parte demandada. Se fijan como agencias en derecho la suma de CIENTO CUARENTA MIL PESOS (\$140.000).

CUARTO: Se ORDENA el avalúo y posterior remate de los bienes que se apresaron al demandado y los que en el futuro lo sean, previo el embargo y secuestro de los mismos.

QUINTO: SE ORDENA a las partes presentar la liquidación del crédito, en los términos del artículo 446 del código General del Proceso.

SEXTO: Envíese el expediente a la oficina civil municipal de ejecución de sentencia para reparto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


VALENTINA SANZ MEJÍA
JUEZ

MPM

Firmado Por:

VALENTINA SANZ MEJIA
JUEZ

JUEZ - JUZGADO 006 MUNICIPAL CIVIL DE LA CIUDAD DE MANIZALES-CALDAS

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **442932ec93e5bc23da3a0ea0062644630971b37f69a4155f01718959a3d7c483**

Documento generado en 26/04/2021 04:39:37 PM